

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sueca (Valencia) por la que se anuncia a concurso-oposición la plaza de Sargento de la Policía Municipal de esta Corporación.

Por la presente se anuncia a concurso-oposición el cubrir la plaza vacante de Sargento de la Policía Municipal de Sueca (Valencia).

La plaza está dotada con el haber anual de cuarenta y cinco mil pesetas de sueldo base, más diecisiete mil cien pesetas de retribución complementaria y demás emolumentos reglamentarios.

Las bases y cuestionario para la oposición fueron publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 258, de fecha 28 de octubre del año actual 1972, y el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días, a partir de la publicación del presente anuncio.

Sueca, 28 de noviembre de 1972.—El Alcalde, Francisco Segarra.—8.896-E.

RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposición para proveer 25 plazas de Oficiales del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ayuntamiento de Madrid por la que se transcribe la lista de opositores propuestos para ser nombrados.

Por acuerdo del Tribunal se hace pública la lista de los opositores que han sido propuestos para que sean nombrados Oficiales del Cuerpo Técnico-Administrativo:

Número	Nombre y apellidos	Puntos
1	D. Antonio Eduardo Pedreira Andrade	24,95
2	D. Diego Membiola Amor	22,75
3	D.ª María Dolores González Pazos	22,70
4	D.ª Concepción Padial de Mera	21,80
5	D.ª María Purificación Estradé Gutiérrez ...	20,75
6	D.ª María Nieves Téllez García	20,40
7	D.ª Isabel Rius Galindo	19,35
8	D.ª Inés Guerra Navarro	18,75
9	D.ª Gloria Marcos García	18,30
10	D.ª María Rosa Gracia Guillén	18,10
11	D.ª María Nieves García Álvarez	18,00
12	D.ª María Carmen Martínez Segovia	17,65
13	D.ª María Consuelo López Moreno	17,40
14	D.ª Pilar Pastor Tramoyeres	17,25
15	D.ª María Angeles Montero Pardo	16,60
16	D. Antonio Pérez Rega	16,02
17	D. Pablo Naranjo Ciudad	15,92
18	D. Francisco Alberto Romero Cristóbal	15,38

Los anteriores opositores deberán presentar en la Secretaría General del Ayuntamiento de Madrid, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparece la presente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en la base 4.ª de la convocatoria.

Madrid, 13 de diciembre de 1972.—El Secretario del Tribunal, Antonio Nogales.—9.624-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Comisión calificadora nombrada por el Director de la Escuela Nacional de Administración Pública para resolver sobre la concesión de ayudas a funcionarios públicos en activo que realizan estudios en Centros de Enseñanza Superior.

La Comisión calificadora nombrada por el Director de la Escuela Nacional de Administración Pública para proceder a la adjudicación, conforme a la convocatoria del «Boletín Oficial del Estado» del 25 de octubre, de hasta 15 ayudas, por un importe máximo de 10.000 pesetas cada una, destinadas a funcionarios de los Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar y otros de análogo nivel que, estando en activo, cursen estudios en Universidades o Escuelas Técnicas Superiores, y compuestas por:

Don Ramón García Mena, como Presidente por delegación del Director de la Escuela; don Carlos Paramés Montenegro, como Vocal, y don Carlos Valenzuela Lillo, como Secretario, ha resuelto:

1.º Fijar el importe de cada una de las ayudas a conceder en la cuantía de 6.000 pesetas, habida cuenta de la valoración media presentada por los solicitantes.

2.º Valorar, conforme a un baremo previamente redactado, las peticiones de cada uno de los solicitantes, tanto en su aspecto personal y familiar como profesional y estudiantil, mediante la asignación de puntos.

3.º Otorgar las ayudas, por un importe, como queda dicho, de 6.000 pesetas cada una, a los siguientes funcionarios, en base al baremo de que se ha hecho mención:

Segura de Medina, Antonio.
Padura y Vizmanos, Juan de.
Corrales Sánchez de la Parra, Gregorio.
Recio García, Domingo.
Romero Mata, Pedro.
Guglieri Bermejo, Juan Andrés.
Aparicio González, María Paz.
Lorite García, Manuel.
Blanco Rivas, Luis.
Soto Fernández, Marciano.
López Mewudo, Francisco.
Treviño González, José.

Villar Monte, José.
Lozano Alonso, María Angeles Lydia.
Izquierdo Izquierdo, Laurentino.

4.º Proponer al Director de la Escuela Nacional de Administración Pública que, habida cuenta del número considerable de instancias presentadas y lo justificado de muchas de ellas, se amplíe, dentro de las posibilidades presupuestarias, el número de ayudas a conceder sobre la base de un nuevo examen de las peticiones no atendidas en esta resolución.

5.º Notificar esta resolución a título personal a cada uno de los adjudicatarios de las ayudas.

Alcalá de Henares, 5 de diciembre de 1972.—El Secretario de la Comisión, Carlos Valenzuela Lillo.—V.º B.º: El Presidente, Ramón García Mena.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 5 de diciembre de 1972 por la que se acuerda dar cumplimiento en sus propios términos a la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 301.353.

Hmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 301.353 seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo por don Alvaro Prego López, don Juan Turnes Noya, don Roberto Gómez Porto, don Eino Paricio Moliner, don Emilio Paredes Mahía, don Juan Raposo Lamas, don Rodrigo Gómez Fernández, don José Vázquez Martínez, don Jesús Montero Díaz, don Manuel Fabeiro Gómez, don José Antonio Picado Corral, Oficiales de la Administración de Justicia, y don Manuel Balado García, don Manuel Santiago García, doña Dolores Rivas Pichel, don Juan Linares Trillo, don José Manuel Vázquez Devesa, don Manuel Bouzas Martelo, don Luis García Abella, don Abelardo Miñán Pradanos, don Marcelino Díaz López, don Antonio Vázquez Devesa, doña Mercedes Fernández Alvarez, don Perfecto Piñeiro Santos, don José Galán López, doña Emilia Núñez López y don Manuel González Alonso, Auxiliares de la Administración de Justicia, que actúan por sí mismo, contra la Administración, representada y dirigida por el Abogado del Estado, sobre impugnación de las resolu-

ciones de la Dirección General de Justicia que desestimaron el recurso de reposición interpuesto contra otras denegatorias del reconocimiento de los servicios prestados como Oficiales y Auxiliares de la Administración de Justicia, con anterioridad a la creación del Cuerpo, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha nueve de noviembre de mil novecientos setenta y dos, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los funcionarios de la Administración de Justicia reseñados en el encabezamiento de esta sentencia, frente a las resoluciones del Ministerio de Justicia por las que, respectivamente, se les denegó la petición deducida sobre reconocimiento de servicios prestados con anterioridad a la creación del Cuerpo a que pertenecen por virtud de lo establecido en la Ley de ocho de junio de mil novecientos cuarenta y siete y que desestimaron los recursos de reposición promovidos en cuanto a las primeras, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones no se hallan ajustadas al ordenamiento jurídico, y, en su consecuencia, las revocamos y dejamos sin efecto, reconociendo en su lugar el derecho que asiste a los actores a que a todos los efectos legales, y especialmente al de determinación y recepción de trienios, les sea computado el tiempo de servicios prestados con anterioridad a la promulgación de la mencionada Ley de mil novecientos cuarenta y siete reconocidos en las relaciones publicadas por el Ministerio de Justicia para su cumplimiento con efectividad desde la entrada en vigor de la Ley 101/1968, de 28 de diciembre, absolviendo a la Administración en cuanto exceda de lo indicado, condenándola a estar y pasar por estas declaraciones y a su cumplimiento; sin hacer especial declaración sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan V. Varquero.—Francisco Vital.—Ángel Falcón (con las rúbricas).

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Francisco Vital y Torres, en audiencia pública celebrada en el mismo día de su fecha. Certifico.—Alfonso Blanco.—Rubricada.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.»

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1972.

ORIOI

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 12 de diciembre de 1972 por la que se acuerda la supresión del Juzgado de Paz de Otero de Sariegos (Zamora).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión del Juzgado de Paz de Otero de Sariegos, como consecuencia de la incorporación de su municipio al de Villafáfila (Zamora). Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de Paz de Otero de Sariegos y su incorporación al de igual clase de Villafáfila, el que se hará cargo de la documentación y archivo del Juzgado de Paz suprimido.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1972.

ORIOI

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DECRETO 3477/1972, de 21 de diciembre, por el que se resuelve la proposición presentada al amparo de lo dispuesto en el Decreto 2058/1971, de 23 de julio, para la construcción, conservación y explotación del tramo Valencia-Alicante como prolongación de la autopista Tarragona-Valencia.

El artículo décimocuarto del Decreto dos mil cincuenta y dos/mil novecientos setenta y uno, de veintitrés de julio, por el que se adjudicó la concesión administrativa para la construc-

ción, conservación y explotación de la autopista Tarragona-Valencia, preveía su ampliación al tramo comprendido entre las ciudades de Valencia y Alicante, todo ello de conformidad con lo establecido en la base primera del pliego de bases del concurso aprobado por Orden de cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno y con lo que sobre el particular disponían el Decreto-ley cuatro/mil novecientos setenta y uno, de cuatro de marzo, y el Decreto mil trescientos noventa y dos/mil novecientos setenta, de treinta de abril.

Con fecha veinte de junio de mil novecientos setenta y dos, «Autopistas del Mare Nostrum, S. A., Concesionaria del Estado», con quien fué formalizado el contrato de concesión de la autopista Tarragona-Valencia a raíz del concurso convocado, presentó una proposición detallada y concreta para la construcción, conservación y explotación del tramo Valencia-Alicante comprendido entre esta última capital y la localidad de Silla (Valencia).

En dicha oferta la mencionada Sociedad hacía constar su compromiso de presentación de una proposición de construcción, conservación y explotación de un tramo de circunvalación de la ciudad de Valencia por el Oeste que enlazara la autopista Tarragona-Valencia con el tramo Valencia-Alicante.

Con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y dos la Sociedad presentó una segunda proposición, alternativa de la anterior, para la construcción, conservación y explotación del tramo Valencia-Alicante comprendido entre esta última capital y la población de Puzol (Valencia), dando así continuidad a la autopista del Mediterráneo.

Ambas proposiciones han sido objeto de estudio por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Y ajustándose la segunda proposición en todos sus términos a aquellos en que fué adjudicada la concesión relativa a la autopista Tarragona-Valencia, y estimada como más conveniente, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se adjudica a la Sociedad «Autopistas del Mare Nostrum, S. A., Concesionaria del Estado», la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación del tramo de autopista Valencia-Alicante, comprendido entre esta última capital y la localidad de Puzol (Valencia), en base a la proposición presentada con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y dos.

Artículo segundo.—La concesión se otorga por un plazo de veintisiete años, contados a partir de la fecha de publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo tercero.—El programa de realización de las obras de construcción será el siguiente:

Secciones	Iniciación	Terminación	Apertura al tráfico
Puzol-Silla	1-I-77	30-XI-78	31-XII-78
Silla-Gandia	1-II-74	30-XI-75	31-XII-75
Gandia-Benidorm ..	1-I-78	30-XI-77	31-XII-77
Benidorm-Alicante.	1-III-74	30-XI-75	31-XII-75

Artículo cuarto.—La Sociedad concesionaria disfrutará del aval del Estado para garantizar el setenta y cinco por ciento del total de los recursos ajenos procedentes del mercado exterior de capitales, asegurando en todo momento lo indicado en la cláusula décima del título primero del pliego de cláusulas de la autopista Tarragona-Valencia, aprobado por Orden ministerial de cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno, y siempre que no se rebase la cifra de once mil novecientos millones de pesetas como cantidad total a avalar durante la gestión. Dicho aval tendrá una vigencia limitada de quince años, a partir de la disposición del crédito y/o emisión de títulos, sin superar nunca la fecha de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Artículo quinto.—La Sociedad concesionaria introducirá en las cuentas del Plan contable vigente las partidas correspondientes a las nuevas secciones de autopista que se produzcan, con el mismo tratamiento que actualmente rige.

Artículo sexto.—En cumplimiento de lo que establece el artículo sesenta y ocho de la Ley de Contratos del Estado y de acuerdo con las atribuciones que confieren al Ministerio de Obras Públicas los artículos sesenta y sesenta y dos de su Reglamento, se aprueban técnicamente los anteproyectos presentados por la Sociedad concesionaria, facultando a dicho Departamento para imponer las prescripciones que estime necesarias, que habrán de ser recogidas en el oportuno proyecto de trazado o de construcción que presente en su momento la sociedad concesionaria, relativos al tramo Puzol (Valencia)-Alicante, cuyo trazado y demás características técnicas deberán someterse a la tramitación que dispone la Ley General de Carreteras, de cuatro de mayo de mil ochocientos setenta y siete, y su Reglamento de aplicación, de diez de agosto del mismo año.

Artículo séptimo.—Las tarifas aplicables al tráfico para los diversos recorridos posibles entre los distintos enlaces no podrán exceder de las cuantías que se indican a continuación: